

Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH
Jueves, 06 de Noviembre de 2014 15:29 -



El pasado miércoles la prensa dio a conocer la captura del ex alcalde del municipio de Iguala en el estado de Guerrero, México, de Juan Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda. La misma se produjo en medio de un sospechoso operativo, conformado por más de 20 efectivos de las fuerzas élite de la Policía Federal de este país, donde según los medios de comunicación, "no hubo tiros ni gritos". Al momento de sus capturas, el matrimonio dormía en una casa un tanto destartalada donde se habían ocultado donde solo había una mesa y una cama. Por su captura se había ofrecido una recompensa de 120 mil dólares.

En la operación también fue capturada Noemí Berumen Rodríguez, acusada por el encubrimiento de la pareja. Más de medio centenar ciudadanos, entre los cuales se incluyen 22 policías corruptos, narcotraficantes y miembros del cartel de las drogas de los Hermanos Beltrán Leyva, conocido como Guerreros Unidos, también fueron detenidos.

Contra Abarca pesaban tres órdenes de captura libradas por la Procuraduría General de la República. En ellas se le imputaba el delito de homicidio calificado, relacionado con las muertes de 6 estudiantes ocurridas el 26 de septiembre de 2014; por tentativas de asesinato, relacionados con las desapariciones de al menos 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y las heridas a otros 25; y de asesinato por la muerte de un líder local ocurrida en 2013. A su esposa, María de los Ángeles Pineda, se vincula con dos de sus hermanos ya fallecidos, narcotraficantes vinculados con el cartel de los Hermanos Beltrán Leyva y las actividades financieras del mismo. El matrimonio se había escondido desde finales del mes de septiembre a raíz de las protestas y movilizaciones sociales en las cuales se fijaba en ellos la responsabilidad como autores intelectuales de las muertes y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

El periodista Jan Martínez Ahrenz, en la edición digital del periódico El País de 4 de noviembre, describe a la pareja en estos términos:

"La pareja, apoyada por este poder oscuro—en referencia al narcotráfico—había protagonizado un fulgurante acenso social. En pocos años pasaron de vender sandalias y sombreros de paja a dirigir un pequeño imperio inmobiliario en Iguala. Desde esta atalaya dieron el salto a la

Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH
Jueves, 06 de Noviembre de 2014 15:29 -

política. Apoyado por el factótum local del PRD, Abarca se hizo en 2012, sin experiencia alguna, con la alcaldía de la tercera ciudad del Estado de Guerrero, el más violento y pobre de México. Como regidor, puso el control de la Policía Municipal en manos del cartel de Guerreros Unidos, que directamente elegía a los agentes. Durante su mandato, las tropelías y abusos se dispararon. Hombre de carácter despótico, Abarca fue acusado de eliminar personalmente a sus rivales políticos. Así ocurrió con el ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de Unidad Popular, un movimiento en defensa de los campesinos. Hernández Cardona, tras una agria disputa con el alcalde, fue torturado y asesinado junto a otros dos dirigentes de su organización. Un superviviente declaró que fue el propio Abarca quien le mató de dos tiros. Uno en la cara y otro en el pecho. La acusación cayó en el cajón del olvido.

En este enramado, su esposa ocupaba un papel central. Hija de una operadora del capo Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de los Jefes, y hermana de los dos narcos que crearon el embrión de Guerreros Unidos antes de morir asesinados por una supuesta traición, Pineda Villa manejaba los hilos financieros del cartel en Iguala. Dominante y de trato duro, su ambición había crecido en los últimos tiempos y ya tenía planeado presentarse a la alcaldía en las elecciones de 2015.”

Los Estados Unidos Mexicanos, es un país con una superficie que se acerca a los 2 millones de kms. cuadrados. Constituye el undécimo país más poblado del planeta y decimocuarto en extensión territorial. Colindan sus fronteras, al Norte con Estados Unidos de América; en el Sureste con Belice y Guatemala; en el Oeste con el Océano Pacífico; y en el Este con el Golfo de México y el Mar Caribe. El país está políticamente integrado por 31 estados soberanos y un Distrito Federal. Su rama legislativa está compuesta por un Senado integrado por 3 senadores representativos de cada uno de los estados federales y 32 senadores adicionales electos proporcionalmente todos ellos por un término de 6 años. El Congreso, por su parte, lo conforman 300 diputados electos directamente, en adición de 200 más escogidos proporcionalmente donde cada estado federal tiene el derecho a tener al menos 2 diputados. Estos diputados, a diferencia de los senadores, se eligen por un término de 3 años.

El estado de Guerrero, localizado en la porción Sur, sur este de México, tiene una extensión territorial de 63,794 Km. cuadrados. Ingresó como estado en la federación mexicana en el año 1849. Cuenta con una población estimada de 3.38 millones de habitantes.

El municipio de Iguala, cuyo nombre completo es “Iguala de la Independencia”, constituye la tercera localidad con mayor población dentro del estado de Guerrero. Conforme al censo de 2010, contaba con una población de 118,468 habitantes. Iguala guarda un importante sitio en la historia del país al ser considerada la cuna de la independencia nacional el 24 de febrero de 1821. También es el lugar en donde se unieron todas las fuerzas opositoras al dominio español; nicho desde donde fue concebida la bandera nacional mexicana; sede de la fundación del primer ejército mexicano; primera capital del estado de Guerrero; y único lugar reconocido en la letra del Himno Nacional de México y en su Acta de Independencia.

La novena estrofa del Himno Nacional de México, hoy omitida oficialmente, contiene en referencia a Iguala, la siguiente letra: “Y el que al golpe de ardiente metralla/ de la Patria las Aras sucumba/ obtendrá en recompensa una tumba/ donde brille de gloria la luz./ Y de Iguala la

Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH
Jueves, 06 de Noviembre de 2014 15:29 -

enseña querida/ A su espada sangrienta enlazada/ De laurel inmortal coronada/ Formará de su fosa la cruz.

Guillermo Castillo, en un artículo escrito para la publicación electrónica ALAI-AmLatina de fecha 29 de octubre de 2014, al describir los sucesos en Iguala con posterioridad a los asesinatos, agresiones y desapariciones de los estudiantes, utiliza una expresión que bien describe la actitud que hasta ahora prevalece en el gobierno México con relación a estos sucesos: "Abajo pasa mucho, arriba no pasa casi nada."

De acuerdo con datos provenientes del gobierno, desde 2006 y hasta mediados de 2013, 26,121 personas habían desaparecido en México. En el sexenio del mandato del anterior presidente, Felipe Calderón, se produjeron 102,969 homicidios y en los primeros 14 meses del actual presidente, la suma de muertes asciende a 23,640. En el año 2013, la cifra de muertes asociadas al narcotráfico sumaron más de 16 mil personas.

Nos dice Víctor M. Quintana S., Asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que la misma violencia que encontramos alrededor de los sucesos en Iguala, la encontramos también en otras localidades de México. Indica que en diversos estados de México, "los carteles se reacomodan, disputan nuevos espacios, constituyen nuevas alianzas perversas, demostrando que la estrategia federal en sus diversas formas, operativos, coordinaciones, etc, etc. no los ha tocado en su línea de flotación."

Por su parte, en el artículo antes citado, nos indica Guillermo Castillo lo siguiente:

"Conforme a la información recabada y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatro personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando el contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policíacas y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañas y Género Vázquez, y posteriormente, ya a fines del siglo XX la política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998)."

Raúl Zibechi, en otra publicación de ALAI-AmLatina, fechada el 24 de octubre de 2014, nos indica: "El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad." Señala que de acuerdo con la última edición de la revista Proceso, "desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del

Escrito por Alejandro Torres Rivera / MINH
Jueves, 06 de Noviembre de 2014 15:29 -

crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero". Sobre el particular, indica, no se obtuvo respuesta. Entiende que lo ocurrido en Ayotzinapa no es sino una advertencia hecha al pueblo sobre hasta dónde el narcotráfico y los políticos corruptos están dispuestos a llegar si se les enfrentan. Por eso no es de extrañar que en estos momentos, en el proceso mismo de las capturas del Alcalde de Iguala y su esposa, salga a relucir la renuncia del Fiscal General de Justicia de Guerrero Iñaki Blanco y su eventual colocación como testigo de la Procuraduría General de la República, como también ocurrió antes con otro alto funcionario de Iguala. Así como ellos, deben haber otros políticos y funcionarios públicos involucrados con los carteles de la droga en México que hoy ocultan a los responsables materiales e intelectuales de la guerra de las drogas en este país.

Se ha indicado que la causa próxima en los asesinatos, agresiones y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa surge dentro de un escenario en el cual, en ocasión de un evento planificado para lanzar la candidatura electoral de María de los Ángeles Pineda a la alcaldía de Iguala, tanto Abarca como ella fueron alertados de la movilización de los estudiantes hacia la ciudad. Previendo las manifestaciones en su contra, ordenaron a la policía municipal, y en consecuencia, a la narco-organización Guerreros Unidos, detenerlos a todo precio. En los primeros enfrentamientos con los estudiantes, estos sicarios y la policía asesinaron a tiros a dos de los manifestantes; a otro lo desollaron en vida ante la vista de los demás; y a otro más, en el proceso de asesinarle, le arrancaron sus ojos. Otros estudiantes fueron arrestados y otros más fueron entregados a sicarios vinculados al narcotráfico entre los cuales se encuentran los 43 estudiantes desaparecidos.

Este nivel de barbarie que representa para nosotros los hechos ocurridos en Iguala, en el caso de las poblaciones campesinas e indígenas de los pueblos de México y Centroamérica, ha sido la historia continua en su lucha por la subsistencia. Son cientos de miles los campesinos e indígenas que durante el pasado siglo han muerto a manos de los señores latifundistas; a manos de los militares al servicio de los intereses oligárquicos; al servicio de políticos que conciben al Estado y sus instituciones como sus fincas privadas, donde los seres humanos son objetos prescindibles; y claro está, en estos momentos donde existe aún mayor deshumanización, por parte de los carteles de drogas que enferman las sociedades de consumo y corrompen los individuos, sin distinción de edades, sexos o clase social.

Esta es la manera en que hoy el capitalismo nos presenta su cara en países donde el Estado ha pasado a ser un "Estado fallido", o como nos dice Raúl Zibechi, un "Estado fallido planificado", que en el caso de México, indica, se ha "construido en las últimas dos décadas para evitar la mayor pesadilla de las élites: una segunda revolución mexicana". En otras latitudes, como sería el caso del Medio Oriente o Asia Central, por mencionar algunas, el "Estado fallido" haya sido también el producto de guerras de agresión e intervención por parte de potencias imperialistas donde las tempestades que se viven hoy son el producto de los vientos sembrados ayer.